

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 1º Juzgado Civil de Puerto Montt
CAUSA ROL	: C-2886-2021
CARATULADO	: VERGARA/AUTOMOTRIZ SALFA SUR
LIMITADA	

Puerto Montt, a ocho de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En **folio 1**, comparece don **Rodrigo Alberto Vargas Molina**, abogado, domiciliado en calle O'Higgins N° 367, oficina 203, comuna de Puerto Montt, en representación convencional, de don **ERIK BASTIAN SANCHEZ SALDIVIA**, técnico nivel superior, cédula de identidad N°17.466.486-2, domiciliado en calle Alcalde José Sandoval Gómez N° 2431, comuna de Castro y de don **DANIEL RODRIGO VERGARA BARRIA**, técnico nivel superior en mecánica automotriz, cédula de identidad N° 12.338.967-0, domiciliado en Fundo Calbuco – Trapi, sin número, comuna de Río Bueno, quienes deducen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, en contra de **AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA.**, persona jurídica del giro de su denominación, Rut N° 93.688.000-2, representada legalmente por su gerente general don **Cristian Pasche Scher**, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Pilpilco N° 800, Parque Industrial, comuna de Puerto Montt, solicitando que en definitiva se declare que el demandado deberá pagar la suma de \$100.000.000, a razón de \$50.000.000, por cada actor, o la suma que el Tribunal fije, por concepto de daño moral, más los intereses y costas.

Funda su demanda señalando que, con fecha 24 de noviembre de 2014 don Erik Bastian Sánchez Saldivia, fue contratado por la demandada para desempeñarse como jefe de patio, de la sucursal de la empresa ubicada en la comuna y ciudad de Castro, calle Gabriela Mistral N° 499, con una remuneración, que a la época de su desvinculación laboral ascendía a la suma de \$727.584. A su turno, indica que, don Daniel Rodrigo Vergara Barría, con fecha 1 de octubre de 2010 fue contratado por la demandada para desempeñarse como jefe del departamento de neumáticos, baterías y lubricantes, de la sucursal de la empresa ubicada en la comuna y ciudad de Castro, calle Gabriela Mistral N° 499, con una



Foja: 1

remuneración, que a la época de su desvinculación laboral ascendía a la suma de \$1.761.896.

Señala que, con fecha 19 de julio de 2017, la demandada puso término a la relación laboral con ambos actores, dando aplicación para ello al artículo 160 N° 1 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 160 N° 7 del mismo cuerpo legal, esto es por falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones y el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Manifiesta que, el proceso de desvinculación de sus mandantes se materializó a través de un documento redactado por la demandada denominado “Declaración, Transacción, Renuncia y/o Desistimiento de Acciones, Recibo y Finiquito Laboral”, cuyo tenor literal, en lo pertinente, hace un desarrollo de los hechos que motivaron el despido de mis representados, a saber:

Respecto del Sr. Erick Sánchez Saldivia: *“Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en lo siguiente: Con fecha 17 de julio de 2017, se ha realizado una auditoría interna en la empresa Automotriz Salfa Sur Ltda. en la cual se ha constatado que usted dentro del ejercicio de sus funciones ha efectuado descuentos indebidos donde el precio final del producto en las facturas emitidas es menor al precio de costo del producto establecido por la empresa esto sin la autorización ni conocimiento de su empleador, llegando a constatare descuentos de hasta un 89% sobre el valor de lista, abusando de sus facultades como Vendedor Salón NBL, además haciendo uso inadecuado del sistema interno de ventas a través de la vulnerabilidad que este presentaba aproximadamente desde agosto de 2016, situación que fue reconocida por usted cuando le fue consultado el día 17 de julio del presente a las 11:00 horas aproximadamente en reunión sostenida con el Gerente de Sucursal Sr. Adolfo Vega, en presencia del Sr. Caros Verdugo Gerente de NBL y Sr. Inaldy Padilla Contador. Esta falta de rectitud en su actuar ha provocado una disminución considerable en los ingresos por ventas de neumáticos, baterías y lubricantes, llegando a obtener actualmente márgenes negativos en la sucursal de castro, específicamente en el área de NBL, donde Ud. está a cargo y es responsable de velar por la gestión eficiente de sus procesos con el fin de maximizar la rentabilidad de negocio. Lo anterior a vía ejemplar se verifica en las siguientes ventas con boletas electrónicas N° 180358; 18053 y facturas electrónicas N° 391374; 392836; 393330; 397886; 399105; 402210; 404117; 406580; 407498; 410580; 411565; 411893; 412129; 412633; 412742; 413075; 414049; 415083; 415192; 415527; 416828; 417460 y 419453. Siguiendo el mismo orden de los números de documentos mencionados se aplicaron porcentajes de descuento de: 85.1%; 76.3%; 76.1; 78.6%; 83.1%; 89.9%; 76.0%;*



Foja: 1

82.9%; 77.3%; 75.7%; 78.7%; 78.6; 84.8%; 76.2%; 80.8%; 83.0%; 89.6%; 79.4%; 80.2%; 80.2%; 85.6%; 88.7%; 79.0%; 83.3% y 81.7% respectivamente, en consecuencia a aplicado los descuentos mencionados la empresa recibió un valor neto de \$6.295.543 (seis millones doscientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos), debiendo recibir por los mismos conceptos \$34.158.194 (treinta y cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil ciento noventa y cuatro pesos), lo que se traduce en una pérdida de \$27.862.651 (veintisiete millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y un pesos). Aproximadamente, por descuentos aplicados sin autorización del empleador. Esto es lo que se ha podido constatar en la auditoría de inicio, faltando por detallar lo que se obtendrá al cierre de este proceso de auditoría. Aquella conducta, significo adicionalmente, obtener ventajas económicas en su fórmula de remuneraciones, específicamente, en las comisiones por venta percibidas en sus remuneraciones mensuales.”

Señala lo siguiente, respecto del Sr. Daniel Rodrigo Vergara Barria: “Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en lo siguiente: Con fecha 17 de julio de 2017, se ha realizado una auditoría interna en la empresa Automotriz Salfa Sur Ltda. en la cual se ha constatado que usted dentro del ejercicio de sus funciones ha efectuado descuentos indebidos donde el precio final del producto en las facturas emitidas es menor al precio de costo del producto establecido por la empresa esto sin la autorización ni conocimiento de su empleador, llegando a constatare descuentos de hasta un 89% sobre el valor de lista, abusando de sus facultades como Jefe de NBL, además haciendo uso inadecuado del sistema interno de ventas a través de la vulnerabilidad que este presentaba aproximadamente desde agosto de 2016, situación que fue reconocida por usted cuando le fue consultado el día 17 de julio del presente a las 11:00 horas aproximadamente en reunión sostenida con el Gerente de Sucursal Sr. Adolfo Vega, en presencia del Sr. Carlos Verdugo Gerente de NBL y Sr. Inaldy Padilla Contador. Esta falta de rectitud en su actuar ha provocado una disminución considerable en los ingresos por ventas de neumáticos, baterías y lubricantes, llegando a obtener actualmente márgenes negativos en la sucursal de castro, específicamente en el área de NBL, donde Ud. está a cargo y es responsable de velar por la gestión eficiente de sus procesos con el fin de maximizar la rentabilidad de negocio. Lo anterior a vía ejemplar se verifica en las siguientes ventas con boletas electrónicas N° 180358; 18053 y facturas electrónicas N° 391374; 392836; 393330; 397886; 399105; 402210; 404117; 406580; 407498; 410580; 411565; 411893; 412129; 412633; 412742; 413075; 414049; 415083; 415192; 415527; 416828; 417460 y 419453. Siguiendo el mismo orden de los



Foja: 1

números de documentos mencionados se aplicaron porcentajes de descuento de: 85.1%; 76.3%; 76.1; 78.6%; 83.1%; 89.9%; 76.0%; 82.9%; 77.3%; 75.7%; 78.7%; 78.6; 84.8%; 76.2%; 80.8%; 83.0%; 89.6%; 79.4%; 80.2%; 80.2%; 85.6%; 88.7%; 79.0%; 83.3% y 81.7% respectivamente, en consecuencia a aplicado los descuentos mencionados la empresa recibió un valor neto de \$6.295.543 (seis millones doscientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos), debiendo recibir por los mismos conceptos \$34.158.194 (treinta y cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil ciento noventa y cuatro pesos), lo que se traduce en una pérdida de \$27.862.651 (veintisiete millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y un pesos). Aproximadamente, por descuentos aplicados sin autorización del empleador. Esto es lo que se ha podido constatar en la auditoría de inicio, faltando por detallar lo que se obtendrá al cierre de este proceso de auditoría. Aquella conducta, significo adicionalmente, obtener ventajas económicas en su fórmula de remuneraciones, específicamente, en las comisiones por venta percibidas en sus remuneraciones mensuales.”

Manifiesta que, con fecha 28 de julio de 2017 la demandada interpuso una querrella criminal ante el Juzgado de Garantía de Castro, en forma directa en contra de sus mandantes, en calidad de coautores del delito de apropiación indebida, presentación que dio origen a la causa Rit N°1500-2017, Ruc N°1710032928

Señala, que con fecha 13 de junio de 2018 sus representados fueron objeto de formalización de cargos ante el Juzgado de Garantía de Castro, oportunidad en que la Fiscalía los encausó por el delito consumado de estafa residual, en calidad de autores. Agrega que con fecha 24 de abril de 2019 sus representados fueron reformatizados por la Fiscalía de Castro en el mentado proceso criminal, como coautores del delito consumado de sabotaje informático y hurto agravado. A su turno, indica que con fecha 30 de abril de 2019 sus representados fueron acusados formalmente por el ente persecutor, por los delitos referidos.

Señala que, con fecha 24 de agosto de 2019 sus mandantes fueron Absueltos de ambos delitos de sabotaje informático y hurto agravado, por el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, en la causa RIT N° 41-2019.

Finalmente, refiere que con fecha 19 de diciembre de 2019, la ltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, confirmó el fallo citado en el numeral precedente, respecto de un Recurso de Nulidad que fuera interpuesto por la demandada de autos, en causa Rol Corte N° 553-2019 RPP.

Expone, que como consecuencia de las falsas imputaciones de la demandada, sus mandantes no tan solo perdieron sus trabajos, sino que también



Foja: 1

fueron sometidos públicamente al escrutinio de una sociedad tan pequeña como es la de la ciudad de Castro, quedando como de verdaderos delincuentes ante la comunidad, vecinos, amigos y familiares, lo que se traduce, en la especie, en un daño moral irreversible, habida cuenta de que, como ha señalado y probará, su inocencia fue establecida judicialmente.

Desde el prisma del derecho, funda su acción manifestando que se cumplen todos y cada uno de los requisitos que hace exigible la indemnización de todo perjuicio, regulada en las normas relativas a la responsabilidad extracontractual del Código Civil, como indicará.

Así, refiere que en términos generales, se entiende que una persona es responsable civilmente siempre que debe reparar un daño; y que en caso que el daño provenga de un delito o cuasidelito civil, esto es, un hecho ilícito cometido con intención de dañar que causa perjuicio (delito civil, artículo 2284 inciso tercero del Código Civil o de un hecho ilícito culpable, cometido sin intención de dañar, que causa perjuicio (cuasidelito civil, artículo 2284, inciso cuarto del Código Civil), estamos frente a la responsabilidad extracontractual, que se manifiesta en la obligación de indemnizar perjuicios, derivadas de imputaciones injuriosas y calumniosas en contra de sus representados, producto de la querella criminal interpuesta por la demandada de autos en contra de ambos actores, ya señalada.

Indica, que injuria es toda expresión declarada o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Agregando que este delito se basa en la intención de quebrantar la posición en relación al resto de los individuos en la sociedad. Y que, diversos fallos de la Corte Suprema han indicado que, para apreciar el ánimo de injuriar del inculpado, hay que tomar en cuenta no solo el significado gramatical de las palabras o frases injuriosas, sino el propósito del que las pronuncia o escribe, la ocasión en que lo hace o la forma que emplea. Señalando que se trata de un mensaje que lesiona el honor de una persona, y puede tener como contenido tanto la imputación de hechos como la expresión de juicios de valor.

En cuanto a las clases de injurias que existen, señala que: Injuria grave es aquella que merece la calificación de grave atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor. Es injuria grave, entre otras: imputar un crimen o simple delito que no dé lugar a procedimiento de oficio; La imputación de un crimen o simple delito penado o prescrito; Imputar de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado; Las injurias que por su naturaleza o circunstancias fueren tenidas como afrentosas.



Foja: 1

Por otra parte, manifiesta que calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso y que actualmente pueda perseguirse de oficio. La calumnia por escrito y con publicidad es una figura más grave. Así, sostiene que cabe consignar sobre este punto que la prensa local y regional se hizo eco nutridamente acerca de los hechos que fundan la presente acción, a través de extensas y variadas notas periodísticas, tal como se probará en estrados.

Expresa, en cuanto los elementos generales de la Responsabilidad Civil Extracontractual, que de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 2284 y 2314 del Código Civil, y conforme a lo resuelto en forma reiterada por nuestros más altos Tribunales de Justicia, para que a una persona - sea natural o jurídica - se le impute responsabilidad civil extracontractual deben concurrir los siguientes elementos: a) que exista un hecho ilícito, esto es, un hecho doloso o culposo; b) que ese hecho ilícito -doloso o culposo- cause daño u ocasione un perjuicio a la víctima; y c) que entre el hecho doloso o culposo, por una parte, y el daño o los perjuicios, por la otra, exista una relación de causalidad. Concurriendo los antedichos requisitos, la demanda de indemnización de perjuicios fundamentada en la responsabilidad civil extracontractual, debe ser necesariamente acogida.

En cuanto al primer requisito, existencia de un hecho ilícito doloso o culposo, refiere que conforme al artículo 2284 del Código Civil, si el hecho de que nacen las obligaciones es ilícito, y cometido con la intención de dañar, ello constituye un delito. Si es culpable, pero cometido sin la intención de dañar, ello constituye un cuasidelito. Y en ambos casos se genera lo que se ha denominado la "responsabilidad civil extracontractual".

A su turno, expresa que de acuerdo con el artículo 2314 del Código Civil el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización. Así, indica que, es requisito fundamental para que exista la responsabilidad civil extracontractual, que se verifique u ocurra un hecho ilícito cometido ya sea con dolo o culpa, y que cause algún daño susceptible de ser indemnizado.

Agrega, que hecho ilícito, es también el contrario a la ley, si se comete con abierta infracción a la normativa jurídica legal o reglamentaria. Así, la apreciación de la conducta del autor del daño (culposa o dolosa), es innecesaria si ésta proviene de la violación de una obligación determinada impuesta por la ley o un reglamento. Señalando que, lo anterior, no es otra cosa que la aplicación de la teoría de los riesgos; esto es, que los riesgos deben ser soportados por quien los introduce.



Foja: 1

Sostiene, que en la especie, la existencia del hecho ilícito es evidente, lo que se traduce en el daño que se ha provocado a los actores y que proviene de un hecho culposo de la demandada, esto es imputaciones calumniosas e injuriosas en contra de los actores, materializadas en una querella criminal incoada por la demandada.

Luego, indica como segundo requisito: Que el hecho ilícito –doloso o cuposo- haya producido daño o perjuicio, así lo dice expresamente el artículo 2314 del Código Civil. Manifestando que, de ahí que para que el hecho delictual o cuasidelictual engendre la consecuente responsabilidad civil, es indispensable que cause daño. Sin él no hay responsabilidad civil; sin interés no hay acción. La obligación de reparar un daño nace precisamente de haberse éste causado.

A su turno, menciona como tercer requisito: Relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño o perjuicio.

Refiere que, es necesario que, entre el dolo o la culpa, por una parte, y el daño, por la otra, haya una relación de causalidad. Es decir, que este último sea la consecuencia o el efecto del dolo o la culpa. Agrega que, este requisito está expresamente contemplado en el artículo 2314 del Código Civil cuando dice que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización. Y también el artículo 2329 del mismo Código al referirse a todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia.

Expone que, de esa forma, hay nexo causal o relación de causalidad, cuando el hecho - doloso o culpable - es la causa del daño producido; cuando sin ella este último no se habría configurado.

Menciona, que la jurisprudencia de nuestros más altos Tribunales de Justicia también ha emitido opinión en torno a la relación causal como requisito indispensable de la responsabilidad civil extracontractual. Ha dicho que la relación de causalidad debe entenderse en su sentido natural y obvio, según el cual sirve para señalar la conexión de dos o más términos entre sí, en razón de ser alguno el fundamento u origen del otro. Entre un acto ilícito y un determinado daño hay relación causal cuando el primero engendra al segundo y éste no puede darse ni producirse sin aquél (Corte Suprema, R.T. 51, Sec. 1ª, pág. 488).

Explica, que la relación de causalidad, en la especie, se da naturalmente en forma clara y evidente, pues la fuente del daño que se indicará más adelante es, precisamente, el actuar negligente de la parte demandada (querella criminal con imputaciones injuriosas y calumniosas). Toda vez que, si fuera posible suprimir, por un instante, la imprudente y negligente acción u omisión de la demandada, ella



Foja: 1

sería reemplazada en el hecho de que, a lo menos, los actores podrían haber conservado sus fuentes laborales y, de paso, no haber sido objeto de los daños provocados por la demandada.

Concluye, indicando que, no cabe duda alguna que la causa directa del daño (moral) que se ha sufrido por los actores, es la conducta negligente e imputable a la parte demandada.

Por otra parte, refiere que los demandantes han sufrido daños y perjuicios, a consecuencia del actuar culposos de la parte demandada, según expone:

En cuanto al daño moral, indica que transcribirá de manera textual el relato de los demandantes, con el objeto de que el Tribunal conozca la afectación y consecuencias provocadas a sus representados, a raíz de los hechos denunciados.

Respecto de Erik Bastian Sánchez Saldivia, expresa: “Todo comenzó en el año 2017, una semana antes de ser despedido recibí una citación a la oficina en el lugar en el cual yo trabajaba (Salfa Sur, Castro), en ese momento mi jefatura a cargo Daniel Rodrigo Vergara Barría se encontraba de vacaciones, en esta reunión extraordinaria se me comenzaron a hacer preguntas sobre el sistema y los descuentos que se aplicaban, sin darme ninguna razón del porqué de las preguntas, por mi parte dije que todos los descuentos que pasaban por el departamento de ventas en el cual yo trabajaba eran autorizados por Carlos Verdugo, gerente del departamento y a su vez Rodrigo Vergara, ellos eran los únicos que podían autorizar a través de sistema cualquier tipo de descuentos, ya que estos tenían las contraseñas, por ende mi recomendación fue esperar el retorno de vacaciones de Rodrigo Vergara, ya que él podía tener mayor información de lo que se me preguntaba. Durante esa semana las citaciones a la oficina fueron a diario, por parte de la gerente administrativa Susana Barrientos y el Gerente de sucursal Adolfo Vega, y en cada una de esas reuniones concurrían a las mismas preguntas, sufriendo durante esa última semana antes de mi despido un hostigamiento por parte de estas personas. Una vez llegado de sus vacaciones Rodrigo Vergara el primer día y a primera hora es citado a la oficina de gerencia, después de un rato me hacen pasar a mí, en el lugar se encontraban el gerente de Puerto Montt Carlos Verdugo, más un gerente de informática, en esa reunión estas personas concurren a la misma pregunta ¿Quién autorizaba los descuentos? A lo cual yo conteste que era el mismo Carlos Verdugo quien era una de las personas que los autorizaban, a lo cual este se niega, queriendo quedar libre de responsabilidades, me preguntan si yo estaba en conocimiento de estos descuentos y mi respuesta fue que sí, ya que de esta manera me capacitaron en



Foja: 1

los años de servicios, por lo cual para mí era algo normal y rutinario. Los descuentos normalmente eran de hasta un 10%, pero si el cliente solicitaba más descuento, se consultaba a los encargados de Puerto Montt, los cuales entregaban desde un 25% hasta un 30% de descuento por compras mayoristas. En esa misma reunión me exigieron firmar un documento bajo presión, ya que amenazaron con llamar a PDI para acusarme de robo, a lo cual no accedí porque las acusaciones hacia mi persona no eran ciertas, mi intención fue ir de inmediato a la Inspección del Trabajo, saliendo de la oficina mi jefe directo Daniel Vergara me recomendó firmar el documento para evitar las supuestas denuncias, ante lo cual accedí y en el mismo instante fui despedido junto a Daniel Vergara sin derecho a nada por falta de probidad, pero ellos habían dicho de palabra que nos pagarían los años de servicio.

Al día siguiente vi en un diario local un aviso con nuestros nombres que hablaba de la desvinculación de ambos, cuando fueron los tramites de ir a firmar mi finiquito a través de la Notaria de Castro, me di cuenta que solo me estaban pagando mis vacaciones pendientes, quise reclamar pero en ese momento el gerente de la sucursal don Adolfo, me comienza a alzar la voz diciendo que yo era un estafador, denigrándome delante de todos los presentes incluyendo a mi pareja la cual me estaba acompañando, por vergüenza y presión firme rápidamente y me fui del lugar.

Después de un par de meses me llaman por teléfono detectives de la PDI, para que pueda ir a declarar a la Comisaría de Castro por una demanda puesta en mi contra, en ese momento tuve un colapso y comencé a caer en una depresión por todo lo que me estaba pasando, ya que mi nombre y el caso aparecían en los diarios, radios, redes sociales y mi nombre y mi imagen se vieron gravemente perjudicadas, se me cerraron puertas de trabajo, donde mi familia me dio la espalda, mi madre me dijo “no crié un hijo para ser un delincuente” y me hecho de la casa, quedando en la calle. Tuve que arrendar una pieza en una población de Castro, donde pase varios meses sin levantarme, con las cortinas cerradas, sin bañarme, producto de mi depresión se me comenzó a caer el pelo por el estrés generado. Al no poder conseguir un trabajo, tuve que endeudarme para poder comprar productos como aceites de vehículos en Santiago, para poder revender en Chiloé, ya que era lo único que sabía hacer en ese momento para poder generar ingresos. Cuando mi negocio comenzó a surgir, por parte de Salfa Sur, algunos de sus vendedores de lubricantes se encargaron de hablar con mis clientes, diciéndoles que “los productos que yo vendía eran los que yo había robado en Salfa Sur”, perdiendo así a todos mis clientes, quedándome con la



Foja: 1

mercadería y no pudiendo pagarles a mis proveedores, los cuales por esta razón me hicieron una demanda por Cobranza Judicial, tampoco pude pagar mi crédito en BancoEstado, el cual era mi capital para iniciar mi negocio, por lo cual me llegó una orden de embargo.

Mientras el juicio concurría y por haber tocado fondo en lo económico, emocional y familiar, tuve que salir de la isla de Chiloé por necesidad a trabajar a Puerto Montt, ya que necesitaba generar dinero.

En la audiencia de formalización, me impusieron las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, donde cada tres meses me citaban al Tribunal, y me proponían aceptar los cargos los cuales eran: por hurto agravado, crimen cibernético supuestamente por hackear el sistema, la propuesta por parte de fiscal junto con el abogado de Salta Sur era aceptar el delito para que tenga una salida alternativa y que así yo no pudiera ir preso, a lo cual me negaba ya que, no podía aceptar algo que yo no había hecho. Al llegar al final del juicio me absolvieron todos los cargos en mi contra por decisión unánime de las tres juezas, por falta de pruebas y respaldo de lo que se me acusaba, esto porque solo eran acusaciones de palabra.

Trabajando en Puerto Montt junte dinero y logre contratar a un abogado para poder realizar una contrademanda, buscando limpiar mi nombre y que se me puedan pagar mis años de servicio, que aún se me deben.

Mediante todos los hechos señalados en esta carta, tuve por consecuencia diversos problemas y enfermedades tales como, depresión, estrés, problemas familiares, problemas económicos, denigración tanto públicas como privadas.”

Por otra parte, respecto de don Daniel Rodrigo Vergara Barría expone su relato: “Después de casi 7 años desempeñándome como Jefe de Departamento en la empresa antes mencionada, teniendo a mi cargo a 6 personas, se decidió poner término al contrato indefinido vigente que mantenía por razones del Art. 160 N° 7 del código del trabajo que dice: (“El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 7 Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato ”), me finiquitaron de forma intransigente e inflexible, argumentando bajas utilidades de la sucursal y malas prácticas de parte de mi equipo de venta y propio las que a opinión de la Empresa provocaban graves incumplimientos de mis obligaciones. Una vez finiquitado comencé a realizar mis trámites de seguro de cesantía en AFC y al tratar de optar a una renegociación de mis créditos que mantenía en esa fecha, uno de ellos es con el Banco Santander el cual no pude acceder a dicho seguro de cesantía, debido a la causal de despido



Foja: 1

lo que a futuro me provoco en un incumplimiento de pagos en mis créditos adquiridos cuando trabajaba, provocando que esté hoy en DICOM, eliminando por completo las posibilidades de acceder a un crédito con algún banco o casa comercial, ya que es uno de los factores que revisan a la hora de aprobarse para poder ponerme al día en mis deudas. Al tratar de conseguir un nuevo empleo me encontré con la negativa de algunas empresas ya que para estas, el proceso de selección de un nuevo trabajador empieza no solo con la lectura del Curriculum Vitae, sino también con las referencias laborales, y al preguntar por referencias laborales en Salfa Sur, daban respuestas de denostación hacia mi trabajo efectuado, aludiendo que había realizado una estafa lo que obviamente me perjudico en mis principales opciones laborales. En el transcurso de los meses luego del despido, me ocasiono muchos problemas personales, familiares y matrimoniales. Porque evidentemente toda la familia queda afectada cuando uno de sus miembros es despedido de su trabajo y siendo yo el que generaba la mayoría de los ingresos pasaba de una situación delicada a una preocupante, vinieron las dificultades y discusiones constantes ya que al no contar con recursos suficientes para mantener u aportar con los gastos de mi hogar, sumándole los comentarios malintencionados que le realizaban a mi esposa en ese entonces en donde me “trataban de estafador y que había realizado delitos informáticos” desencadenaron una muy triste separación y luego con los meses en un lamentable divorcio muy complicado, esta nueva situación me afecto mucho emocionalmente ya que me sentía en total abandono, humillado, maltratado profesionalmente y muy deprimido. Debido a todas estas complicaciones monetarias y familiares tuve que dejar a mi hija adolescente, ya que ella se sentía muy avergonzada con lo que escuchaba de su padre tanto en los diarios de la zona como en las redes sociales por lo que tome una difícil y triste decisión de salir de la Isla de Chiloé y alejarme de todo lo que nos estaba destruyendo tanto a mi familia como a mí. Así fue como tome la decisión de retornar a la casa de mis padres en la Región De Los Ríos para tratar de comenzar de nuevo y buscar trabajo para poder ir en ayuda económica de mi hija. En mi perseverancia por encontrar un trabajo estable, tuve la suerte con todos los hechos acontecidos en el país, en el mes de Marzo del 2020 poder acceder a un trabajo en la ciudad de Río Bueno en donde resido actualmente, trabajo que me permite aportar económicamente en la pensión alimenticia de mi hija y solventar mis gastos en estos tiempos tan complicados, pero tampoco me ha permitido poder ponerme al día en mis deudas acarreadas por la situación vivida. Para mí no es fácil recordar y resumir en un papel todo lo que sufrí en esos momentos, ver y sentir la vergüenza y humillación en los ojos de mi única hija, esto me afecto tanto



Foja: 1

emocionalmente, como laboralmente, pero lo peor fue que destruyo mi familia. Solo puedo decir que el tema de Salfa Sur fue un desastre para mi vida, me complico tanto el tema financiero que mantengo deudas hasta el día de hoy. Tengo sentimientos encontrados al pensar en ir a visitar a mi hija a la Isla de Chiloé porque duele recordar que ahí pase los peores momentos de mi vida y el miedo de que el juicio social que provoco esta injusta acusación se repita y siga afectando el desarrollo emocional de mi hija. Espero con todo respeto que en estas palabras se vea reflejado el sufrimiento y denostación que viví de parte de la Empresa Salfa Sur Ltda.”

Refiere, que existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia, para definir el daño moral como “todo detrimento o menoscabo que una persona experimenta por hecho o culpa de otro, ya sea en sus bienes o en cualquiera de sus derechos extrapatrimoniales”, ampliando así el tradicional concepto que definía el daño moral como el “miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionada por el hecho dañoso” -es decir, el *pretium doloris* -, o como “el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimiento, creencia o afectos”, concepto este último del Profesor Arturo Alessandri.

Indica, que la noción de daño moral, en los últimos años, ha sido reformulada y hoy en día existe un amplio consenso sobre la amplitud de su concepto (daño extrapatrimonial o no patrimonial). Agregando que la doctrina nacional se ha puesto al día en estas materias y actualmente tenemos amplio material bibliográfico de autores tales como don Ramón Domínguez, doña Carmen Domínguez, don Fernando Fueyo, don José Luis Diez Schwerter, don Pablo Rodríguez, entre otros.

Explica, que para graficar la procedencia de la petición de su parte, adscribe al pensamiento de doña Carmen Domínguez y su libro “El Daño Moral” (Tomo I. Editorial Jurídica. Edición 2000. Páginas 78 y siguientes). La autora señala que “de acuerdo con esta evolución, la persona ha de ser tutelada en sí misma, con independencia de sus bienes e intereses económicos. Con ello no quiere decirse que no haya de protegerse a éstos. Ellos están ya considerados en las normas vigentes, por lo que su defensa está ciertamente garantizada, sino que lo que quiere afirmarse es que además cabe una esencial protección a la persona (subrayado es nuestro). O mejor todavía, esta última ha de hacerse tanto en lo que a ella pertenece, como son sus bienes e intereses económicos, como en sí misma. Esta tutela ha de traducirse en la recepción de la idea de que el deber de no dañar comprende también el de no afectar a la persona, considerada cabalmente, tanto en su aspecto físico, cuanto en sus sentimientos y atributos -



Foja: 1

atributos en el sentido más amplio, es decir, como derechos de la personalidad- (subrayado es nuestro). La persona no es una suma de cuerpo y mente, sino un todo, compuesto de cuerpo, sentimientos, ánimo, intimidad, honor y afectos". (Página 82).

Manifiesta que, luego de este análisis, la misma autora indica que "por todo lo anterior, estamos con aquellos que conciben el daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma –física o psíquica-, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende pues el daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, considerando como un valor en sí y con independencia de sus alcances patrimoniales" (página 83).

Como podemos apreciar, la tesis del daño moral como "pretium doloris" ha sido superada y el daño moral hoy es algo más que "todo detrimento o menoscabo que una persona experimenta por hecho o culpa de otro, ya sea en sus bienes o en cualquiera de sus derechos "extrapatrimoniales" (Corte de Chillán. 5 octubre 1970. RJD T67. Pág. 85. Citado en libro de don José Luis Diez Schwerter. El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina; Editorial Jurídica de Chile 1997).

Además, sostiene que desde hace ya varios años, la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales de justicia ha aceptado la tesis de que existe daño moral en la responsabilidad extracontractual e, incluso, en la contractual.

Expresando que, no cabe duda, en este caso, que como consecuencia de la grave negligencia de la demandada se ha generado un enorme daño moral atribuible a esta última.

Luego, respecto a la prueba del daño moral, señala que se ha establecido: "Que además de la exigencia legal en la prueba tasada, el sentido común y la doctrina de los autores han llegado a la conclusión que los hechos normales no necesariamente requieren de prueba, ya sea sobre la base del principio de la realidad, el hecho notorio, los actos propios, etc. Aquello no es baladí, sino constituye uno de los presupuestos esenciales en el juzgamiento dentro de un debido proceso, pues la resolución acertada persuade a los intervinientes y genera paz individual, familiar y social. Así, Eduardo J. Couture (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición de Palma, 1993, págs. 215 y siguientes, y "El Proceso en Acción", Raúl Tavolari, Libromar Ltda., año 2000, pág. 281 y siguientes), señala que "también está fuera del objeto de la prueba la demostración de los hechos evidentes", a nadie se le exigiría probar, por ejemplo, el hecho de que haya llegado primero ante sus sentidos los efectos de la luz que los efectos del sonido, que la luz del día favorece la visión de las cosas y la



Foja: 1

oscuridad la dificulta, etc. En esos casos la mentalidad del juez suple la actividad probatoria de las partes y puede considerarse innecesaria toda tentativa de prueba que tienda a demostrar un hecho que surge de la experiencia misma del magistrado, no sólo como juez sino como un ser humano pensante.

Manifiesta, que todo este razonamiento actualmente lo recoge también el Anteproyecto del Código Procesal Civil en su artículo 15 y el último Proyecto presentado a la fecha en la Cámara de Diputados, artículos 260 y siguientes. E indica que, en ese sentido, el artículo 263 es más exigente porque incluso permite al juez excluir la prueba que tuviere por objeto acreditar hechos públicos y notorios y este último concepto se asimila a los hechos evidentes, por lo tanto, concurre más de una razón para establecer como nemine discrepante que los hechos normales y evidentes no se prueban. De esto no hay duda en la doctrina nacional, ya que la discusión nace para evaluar el mismo, puesto que el daño moral posee una naturaleza o dimensión no pecuniaria y, por lo tanto, traducirlo en una apreciación monetaria no es cosa sencilla, pero eso es parte de otro argumento que no permite a un juez, en aplicación de estas reglas mínimas, desconocer lo evidente, notorio e indiscutible en la aflicción psíquica que sufre una persona ante las consecuencias graves.

En consecuencia, manifiesta que con mayor razón en el caso sub-lite, que se trata del irreparable daño moral del que han sido objeto sus comitentes, que de no mediar las abusivas, arbitrarias, ilegales, injuriosas y calumniosas imputaciones de la demandada Salfa Sur Ltda., que se pudieron haber evitado, dejan en clara evidencia el daño moral sufrido por ellos, atendido el menoscabo anímico y emocional, sufrimiento y angustia que mis representados han soportado a consecuencia de tal hecho dañoso únicamente imputable a la demandada.

Por lo mismo, sostiene que su parte demanda una indemnización por daños morales de \$100.000.000 a razón de \$50.000.000 por cada actor, más intereses corrientes para operaciones no reajustables entre la fecha del siniestro y la del pago efectivo o entre las que el Tribunal determine.

En **folio 3**, con fecha 20 de septiembre de 2021, se tuvo por interpuesta demanda, dando traslado a la parte demandada.

En **folio 5**, con fecha 28 de septiembre de 2021, consta estampado receptorial de notificación personal realizada a don Cristian Pasche Scher, en representación de Automotriz Salfa Sur Limitada

En **folio 6**, con fecha 15 de octubre de 2021, comparece el abogado Matías Ruiz-Tagle Méndez, en representación del demandado, quien contesta la



Foja: 1

demanda, solicitando su rechazo con expresa condenación en costas, según los siguientes argumentos.

Indica, que Salfa Sur, es una empresa dedicada a la comercialización, reparación, ventas de repuestos, neumáticos, arriendo y distribución de automóviles, para lo cual cuenta con una serie de sucursales en el sur de nuestro país.

Sostiene, que los demandantes efectivamente prestaron servicios para su representada, con fecha 24 de noviembre de 2014, el señor Sanchez fue contratado por Salfa Sur para desempeñarse como jefe de patio de la sucursal de la empresa ubicada en la ciudad de Castro. A su turno, indica que con fecha 1 de octubre de 2010, el señor Vergara fue contratado por Salfa Sur para desempeñarse como jefe del Departamento de neumáticos, baterías y lubricantes, también en la ciudad de Castro.

Manifiesta, que con fecha 19 de julio de 2017, Salfa Sur puso término a la relación laboral de los demandantes por las causales establecidas en el artículo 160 N° 1 y N° 7 del Código del Trabajo, esto es la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones y el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, respectivamente.

Sostiene, que al término de la relación laboral las faltas graves cometidas por ambos demandantes, fueron reconocidas, señalando expresamente haber realizado una serie de actos tendientes a aumentar sus remuneraciones en forma indebida por considerables sumas de dineros según analizaremos y acreditaremos en su oportunidad.

Expresa, que en este contexto de término de la relación laboral que unió a Salfa Sur y los demandantes, con fecha 19 julio del 2017, suscribieron un contrato denominado “declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento acciones, recibo y finiquito laboral”.

Agrega que, con fecha 28 de julio de 2017, Salfa Sur interpuso una querrella criminal ante el Juzgado de Garantía de Castro, sobre la base de los graves hechos que habían sido reconocidos expresamente por ambos demandantes, por el delito de acción pública de apropiación indebida.

Luego, aduce que, respecto de la prescripción de la acción de indemnización por responsabilidad civil extracontractual, que en la especie, se demanda por responsabilidad civil extracontractual, deriva de los hechos que señala el demandante en su libelo, en especial cuando señala “la responsabilidad extracontractual, que se manifiesta en la obligación de indemnizar perjuicios, derivadas de imputaciones injuriosas y calumniosas en contra de mis representados, producto de la querrella penal interpuesta por la demandada”



Foja: 1

Manifiesta, que es claro que se sustenta la presente acción indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual, en el hecho que Salfa Sur, con fecha 28 de julio del año 2017, interpuso querella criminal ante el Juzgado de Letras de Garantía de Castro, en forma directa en contra de los demandantes, en calidad de coautores del delito de apropiación indebida, que dio origen a la causa RIT N° 1500-2017.

Indica, que el artículo 2332 del Código Civil, dispone: “Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto.”

Así, expresa que en este orden si considera, en virtud de los propios fundamentos de la demanda, que la perpetración de acto que da origen a la supuesta responsabilidad civil extracontractual que se imputa a Salfa Sur, sería que con fecha 28 de julio del año 2017 interpuso querella criminal ante el Juzgado de Letras de Garantía de Castro, la presente acción se encuentra prescrita al tenor de los artículos 2332 en relación con el artículo 2514 ambos del Código Civil.

Agregando que, en efecto, la presente acción prescribió el 29 de julio año 2021, por tanto, habiéndose notificado la presente demanda el 28 de septiembre de este año, es inevitable concluir que la acción, se encuentra prescrita. Señalando que en la hipótesis que la interrupción de la prescripción se produce por la sola interposición de la demanda, igualmente la acción se encuentra prescrita.

Luego, explica en cuanto a la improcedencia de la indemnización por daño moral por supuestas imputaciones injuriosas. Agrega, que como ha señalado, la presente acción por responsabilidad civil extracontractual, se sustenta en el hecho que con fecha 28 de julio del año 2017, Salfa Sur, interpuso querella criminal ante el Juzgado de Letras de Garantía de Castro, en forma directa en contra de los demandantes, en calidad de coautores del delito de apropiación indebida, que dio origen a la causa RIT N° 1500-2017. Indicando que, con la interposición de esta querella se habrían imputado una serie de hechos injuriosos en contra de los demandados, por lo que según lo dispuesto en el artículo 2284 del Código Civil estaríamos frente a una responsabilidad extracontractual que se manifiesta en la obligación de indemnizar perjuicios por la comisión de un hecho ilícito culpable. Además, aduce que, sin perjuicio, que no se señala si el actuar de Salfa Sur sería doloso o culpable, claramente para los demandantes la conducta de su representada materializada en una serie de imputaciones supuestamente injuriosas a través de la presentación de una querella criminal constituiría un hecho ilícito que debe ser indemnizado. Señala que, citan para tal efecto el artículo 2314 del Código Civil, respecto de la comisión de un delito o cuasidelito



Foja: 1

que ha inferido daño a otro, es obligado a indemnizar. Luego, en abierta contradicción con toda su fundamentación, terminan citando el artículo 2329 del mismo cuerpo legal referido a la reparación del daño derivado de malicia o negligencia imputable al a un actor.

Aduce, que según analizará a continuación ninguna de las hipótesis planteadas por los demandantes genera la obligación de Salfa Sur de indemnizar los perjuicios demandados.

Manifiesta que en la demanda, se señala expresamente que “En términos generales, se entiende que una persona es responsable civilmente siempre que debe reparar un daño; y que en caso que el daño provenga de un delito o cuasidelito civil, esto es, un hecho ilícito cometido con intención de dañar que causa perjuicio (delito civil, artículo 2284 inciso tercero del Código Civil) o de un hecho ilícito culpable, cometido sin intención de dañar, que causa perjuicio (cuasidelito civil, artículo 2284, inciso cuarto del Código Civil), estamos frente a la responsabilidad extracontractual, que se manifiesta en la obligación de indemnizar perjuicios, derivadas de imputaciones injuriosas y calumniosas en contra de sus representados, producto de la querella criminal interpuesta por la demandada de autos en contra de ambos actores”. Respecto a ese punto, indica que se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 2331 del Código Civil que dispone: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación.”

Indica que, nuestro legislador ha dispuesto expresamente que sólo procede la indemnización por lucro cesante y daño emergente respecto de las imputaciones injuriosas, cuando se acredite la falsedad de la imputación. Concluyendo que por lo expuesto, necesariamente no proceden las indemnizaciones por daño moral respecto de imputaciones injuriosas. Así, en ese orden, habiéndose demandado solo daño moral, se hace imposible que se acceda a la demanda.

Luego, agrega que sin perjuicio que en la especie no procede la indemnización por daño moral, será imposible que los demandantes aleguen que las supuestas imputaciones hechas por Salfa Sur con la presentación de la querella de 28 de julio de 2017 son falsas e injuriosas, ya que con fecha 19 de julio de 2017 ambos demandantes suscribieron un documento denominado declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento acciones, recibo y finiquito laboral.



Foja: 1

Refiere que, la causal invocada por Salfa Sur para poner término al contrato de trabajo de los demandantes, fueron las contempladas en el artículo 160 N° 1 y 7 del Código del Trabajo, esto la falta de probidad en el desempeño de sus funciones y el incumplimiento grave de las imputaciones que impone el contrato.

Sostiene, que por falta de probidad, según se ha establecido por nuestra jurisprudencia laboral, la debemos entender como aquellos hechos o acciones que impliquen falta de honradez y honestidad en el obrar, la falta de probidad del trabajador aparece calificada, per se, como una conducta de carácter grave. El diccionario de la Real Academia Española, la define como la falta de bondad, rectitud del ánimo, integridad y honradez en el actuar, de modo que la carencia de estas cualidades constituye falta de probidad.

Manifiesta, que parece ser impresentable que los demandantes hoy, después que haber reconocido expresamente su participación en los hechos por los cuales se les despidió y que estos hechos constituyen una grave falta de honradez, pretendan calificarlos como imputaciones injuriosas, por la razón de haber sido absueltos en un proceso criminal.

Señala, que lo importante, para resolver este tema civil que nos convoca, no es el resultado de un proceso criminal por un delito de acción penal pública, lo trascendente es determinar si las imputaciones hechas por su parte fueron injuriosas e infundadas, lo que queda absolutamente descartado desde el momento que ambos trabajadores reconocieron expresamente que su actuar fue deshonorado.

En este orden, explica que, pretender sostener que la absolución en un proceso criminal elimina la falta de honradez en el actuar de un sujeto, la que fue reconocida expresamente, carece de todo sustento. La absolución en el proceso criminal no pasa por un juicio de valor que necesariamente se debe hacer en sede civil, el juicio penal liderado por el Ministerio Público y con un estándar probatorio muchas más exigente que en materia civil, concluye en absolución por insuficiencia probatoria, pero en ningún momento, refiere que la conducta de los demandantes haya sido honrada o proba, por lo que su resultado bajo ningún concepto transforma el actuar de Salfa Sur en acto doloso, culpable o negligente.

Luego, explica en cuanto a la inexistencia de dolo, culpa o negligencia inexcusable por parte de Salfa Sur en la interposición de la querrela criminal en contra de los demandantes, que como ha venido sosteniendo, el actuar de su representada se ajusta a lo que se debe entender como el ejercicio de un legítimo derecho.

Así, sostiene que el derecho romano concibió un aforismo que quedó plasmado en el Digesto y cuya invocación es suficiente para conducir al rechazo



Foja: 1

de la presente demanda: “qui iure suo utitur neminem laedit” (quien ejercita su derecho no daña a nadie). Agregando que, al interponer su representada la querrela criminal en contra de los demandantes, no realizó ningún acto que fuera contrario a la legislación, si no por el contrario se trata de una acción avalada y regulado en nuestra ley. Indica, que La Constitución Política, no solo justifica, sino que garantiza y ampara el actuar de Salfa Sur, reconociéndole al derecho a acceder a una tutela judicial efectiva (artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, “CPR”), garantizando expresamente el ejercicio de la acción penal.

Refiere, que lo anterior también se ve reflejado en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal en cuanto a la titularidad de la acción penal y la protección a la víctima. Menciona algunos autores, entre ellos, al profesor Hernán Corral, que sobre este punto señala que: “Cuando el daño proviene de un derecho reconocido, y cuyo ejercicio se ajusta a lo regulado por la ley, no puede haber responsabilidad, porque no existe ilicitud en el comportamiento. Así, por ejemplo, no son indemnizables los daños que se producen al deudor por la traba de un embargo sobre sus bienes, ni tampoco los que sufre un comerciante por efectos de la instalación de un competidor. Rige aquí el principio ya consagrado en el Digesto: qui iure suo utitur, neminem laedit (quien ejerce derecho a nadie ofende)”. Añade que, en el mismo sentido, el profesor Abeliuk, señala que: “Por regla general, cuando una persona actúa en virtud de un derecho, aunque ocasione daño a otro, no tiene responsabilidad, y así, el importante crítico de teatro que califica mal una obra, por lo cual ésta constituye un fracaso económico, ha ocasionado un perjuicio, pero sin culpabilidad de su parte, pues ha ejercido legítimamente su derecho”

Concluye, según lo expuesto, que el sólo ejercicio de una acción, cuya investigación, formalización y acusación son privativas del Ministerio Público, en la cual se dicta sentencia absolutoria, no puede constituir en sí misma un ejercicio abusivo y consecuentemente transformar ese ejercicio en una conducta, dolosa, culpable o negligente, más aún, si la parte querellante, no fue condenada en costas por motivos plausibles. “Que no se condena en costas al Ministerio Público y a la querellante Salfa Sur Limitada, por haber tenido motivo plausible para litigar”.

Manifiesta, que habiendo despejado el punto que el sólo hecho que su representada haya ejercido su derecho a denunciar amparado por la ley y la Constitución Política, no transforma esa conducta per se en una acción dolosa, culposa o negligente, debemos ahora avocarnos a las razones por las cuales Salfa Sur se querelló en contra de los demandantes y si esta imputación puede ser calificada de injuriosa. Desde ya descarta que las imputaciones hechas Salfa Sur en la querrela criminal, que son las mismas que ambos demandantes reconocieron



Foja: 1

expresamente en el documento denominado declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento acciones, recibo y finiquito laboral, de fecha 19 de julio de 2017, puedan ser calificadas de injuriosas, ya que tanto el señor Sánchez como el señor Vergara manifestaron haber actuado con falta de probidad, según analizamos en el apartado anterior, por lo que no pueden sostener, ahora, que se afectó su honra. Señalando, que en el mes de julio de año 2017, su representada detectó una serie de irregularidades en el área de ventas de neumáticos, baterías y lubricantes en sucursal de Castro. Producto de lo anterior, indica que se realizó un auditoria interna que concluye en los hechos y las participaciones señaladas en la cláusula primera del documento denominado declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento acciones, recibo y finiquito laboral, firmado por ambos demandantes.

A su turno, en cuanto a los hechos constatados y reconocidos por ambos demandantes, refiere que cuando ambos trabajadores reconocen su participación en estos hechos, su representada en el ejercicio de su legítimo derecho de accionar, decide poner en conocimiento de los mismos al Ministerio Público con la presentación de una querella criminal con fecha 28 de julio de 2017. Añadiendo, que la querella criminal cumplió con todos los requisitos formales para ser declarada admisible y acogida a tramitación.

Manifiesta que al ser el delito de apropiación indebida uno de acción penal pública, su investigación, formalización y acusación son privativas del Ministerio Público, el querellante, no es más que un mero espectador de las decisiones y acciones del Ministerio Público. En ese orden, su parte respondió diligentemente a todas las actuaciones de procedimiento penal, aportó todas las pruebas que tenía en su poder, siendo el Ministerio Público, quien formalizó, acusó y llevó a juicio oral a ambos demandantes, acusación a la cual Salfa Sur oportunamente se adhirió. Luego, la sentencia del Tribunal Oral de Castro decidió absolver a los demandantes por falta de prueba, la cual no permitió pasar la barrera de la duda razonable, y no condenó en costas ni al Ministerio Publico ni a la parte querellante, por tener motivo plausible para litigar.

Indica, que en nuestro sistema procesal penal, respecto de los delitos de acción pública es poca la injerencia que tiene el querellante en la tramitación del proceso penal, y por tanto es poca la injerencia y participación que tiene en sus resultados. Señala, que en efecto, puede el querellante desistirse de acción y el Ministerio Público, debe continuar con la persecución del delito denunciado.

Por tanto, sostiene que imputar a Salfa sur responsabilidad por el resultado de una acción penal que le corresponde a un tercero, pareciera no tener mucho acierto.



Foja: 1

Refiere, que igualmente se debe tener presente que, si bien en el juicio oral en lo penal se desestimó el documento denominado declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento acciones, recibo y finiquito laboral, por no ser suficiente para admitir responsabilidad penal, debido al alto estándar que se exige en derecho penal, para tener por acreditado un hecho y consecuentemente la responsabilidad penal, creemos en para el caso que nos ocupa, en el marco de un procedimiento civil por responsabilidad extracontractual, los antecedentes que contaba mi representada, para realizar la imputación y el reconocimiento expreso de ambos demandantes, respecto de los hechos imputados, son más que justificativos para concluir que Salfa no ha actuado de forma, dolosa, culposa o negligente.

Añade, que si hubiese algún grado de responsabilidad en el actuar de su representada, lo que descarta, esta responsabilidad no superaría la culpa levísima, entendiéndola como la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Estándar de responsabilidad que queda fuera marco sancionatorio de responsabilidad civil extracontractual.

Por otra parte, en cuanto a los perjuicios demandados, se demanda la suma de \$50.000.000 para cada demandante por concepto de daño moral. Como ya indico, según dispone el artículo 2331 del Código Civil, solo procede la indemnización de perjuicios materiales, respecto de la imputación de hechos injuriosos, por lo que el Tribunal no podrá acceder a la acción de indemnización por daño moral, no existe nexo causal entre la acción de su parte, interposición de una querella criminal, y los supuesto perjuicios causados a los demandantes, no solo porque no hay negligencia en el actuar de Salfa Sur, sino que además de la propia narración que ellos hacen en la demanda respecto al daño moral. El Tribunal podría apreciar que se invocan otros hechos distintos a la interposición de una querella criminal.

Sostiene, que en el caso que se acceda a esta indemnización, para determina su quantum, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, en cuanto a la exposición al daño, materializado por las declaración y conductas expresamente reconocidas por ambos demandantes según se ha señalado latamente en la presente contestación. Y, en caso que se determine que su representada estaría obligada a indemnizar algún perjuicio consideremos que la suma de \$ 50.000.000, para cada trabajador por daño moral, es absolutamente desproporcionada a nuestra realidad jurisprudencial, donde los montos de condenas por hechos de semejante intensidad no superan los \$10.000.000.



Foja: 1

En **folio 10**, por presentación de fecha 22 de octubre de 2021, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica ratificando los argumentos esgrimidos en la demanda, refiriéndose respecto a la defensa planteada por la contraria, que dice relación con la supuesta prescripción extintiva de la responsabilidad indemnizatoria extracontractual sub lite. Al respecto manifiesta que en efecto, el letrado contradictor asila su alegación muy puntal, en los términos expresados en el libelo pretensor que señala “causa perjuicio (cuasidelito civil, art. 2284, inc. 4, del Código Civil), estamos frente a la responsabilidad extracontractual, que se manifiesta en la obligación de indemnizar perjuicios, derivadas de imputaciones injuriosas y calumniosas en contra de sus representados, producto de la querella criminal interpuesta por la demandada de autos en contra de ambos actores, ya señalada precedentemente en la relación de hechos del presente libelo” (sic).

Sostiene, que el contexto en el que se ubica el mentado acápite se inserta en el siguiente texto global, dentro del literal A) del capítulo II “Introducción”, a saber: “En términos generales, se entiende que una persona es responsable civilmente siempre que debe reparar un daño; y que en caso que el daño provenga de un delito o cuasidelito civil, esto es, de un hecho ilícito cometido con intención de dañar que causa perjuicio (delito civil, art. 2284, inc. 3, del Código Civil) o de un hecho ilícito culpable, cometido sin intención de dañar, que causa perjuicio (cuasidelito civil, art. 2284, inc. 4, del Código Civil), estamos frente a la responsabilidad extracontractual, que se manifiesta en la obligación de indemnizar perjuicios, derivadas de imputaciones injuriosas y calumniosas en contra de sus representados, producto de la querella criminal interpuesta por la demandada de autos en contra de ambos actores, ya señalada precedentemente en la relación de hechos del presente libelo.”

Manifiesta, que en dicho orden de ideas, la tesis de la defensa estriba en tratar de establecer e imponer antojadizamente, como criterio, el transcurso de un plazo superior a 4 años, plazo prescripción de la responsabilidad extracontractual, cuyo cómputo la demandada sitúa, como fecha de inicio, el día 28 de julio de 2017, esto es, la fecha que le acomoda para estos efectos, en la que Salfa Sur Ltda. interpuso una querella criminal en contra de sus mandantes. Señala, que la mentada acción penal le asignó a sus comitentes la calidad de coautores del delito de apropiación indebida, pues bien, en consecuencia, la acción en comento se judicializó y, tal como se indicó en la demanda de autos, la misma terminó con un fallo absolutorio confirmado por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 19 de diciembre de 2019.

Concluye, que recién después de haber concluido el debate jurídico en sede penal, recién ahí nace a la vida jurídica el daño moral que su parte reclama,



Foja: 1

mas no antes, toda vez que, por el contrario, ello no hubiere sido posible en el evento de haberse condenado a los actores y, por ende, esta es la orientación que su parte le ha otorgado a la acción de marras.

A mayor abundamiento, en el evento de que se estimare que el daño que se ha infligido a sus representados fluye desde la radicación de la ya señalada acción penal, tampoco la demanda que nos ocupa ha prescrito, toda vez que, concurre en la especie, el instituto procesal de la interrupción civil de la prescripción, en este caso, extintiva.

Refiere, que tal como se probará en la oportunidad procesal pertinente la prescripción se interrumpió civilmente cuando su parte interpuso la misma demanda ante el Juzgado de Letras de Castro, con fecha 8 de junio de 2021 (Rol C-825-2021), por considerar, en primera instancia, que dicho tribunal era el competente para conocer el asunto. Sin embargo, la contraria, válidamente notificada, opuso la excepción de incompetencia relativa del Tribunal, incidencia que a la postre fue acogida por el juez, mediante la sentencia interlocutoria de 8 de septiembre de 2021. Luego, la demanda fue enderezada inmediatamente con fecha 14 de septiembre de 2021. Agregando que, nada señalan las normas de interrupción civil de la prescripción en torno a si la acción deducida ante tribunal incompetente tiene un efecto interruptivo. Sin embargo, es opinión asentada, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que el hecho de que la acción se ejerza ante tribunal incompetente no es obstáculo para que se interrumpa la prescripción, señalándose los siguientes argumentos: a) La ley, al indicar que todo recurso judicial o demanda interrumpe la prescripción, no distingue si estas son entabladas ante tribunal competente o incompetente. Y, como la incompetencia del tribunal no es señalada como uno de los casos no interrumpe la prescripción en el artículo 2503 del Código Civil, y al ser estos casos interpretados de forma restrictiva por ser excepcionales, debe concluirse que la incompetencia del tribunal no es un factor decisivo; b) La presentación de la acción manifiesta inequívocamente la voluntad del propietario o acreedor en orden a hacer valer su derecho, aunque ésta sea ante un tribunal incompetente; c) Uno de los fundamentos de la prescripción es el abandono del derecho o negligencia de la persona contra la cual se prescribe. La interrupción civil, por su parte, es el quiebre de este abandono o negligencia, lo cual se ve satisfecho por la presentación de una demanda, aun ante tribunal incompetente y; d) Las cuestiones de competencia no son de fácil solución. Las partes se equivocan frecuentemente e incluso los tribunales tienen dificultades en determinar su competencia, por lo que no sería justo que quien hace valer su derecho en el tiempo oportuno no pueda interrumpir la prescripción por haber ejercido su acción ante un tribunal incompetente.



Foja: 1

Añade, que la Excm. Corte Suprema ha apoyado este razonamiento fallando: “Para la correcta inteligencia del artículo 2518, es menester tener presente que en concepto de estos sentenciadores la demanda intentada ante juez incompetente interrumpe la prescripción, porque existe una manifestación expresa del acreedor de no renunciar a su derecho, e igualmente que la sentencia interlocutoria que así lo señala no constituye la absoluc  n referida en el art  culo 2503 N  3 del C  digo Civil, porque el   nico efecto procesal que produce es liberar al ejecutado de la obligaci  n de proseguir el litigio ante ese tribunal, pero no lo libera del cumplimiento de la obligaci  n contra  da, la cual quedar   sometida a la decisi  n del tribunal competente.” (Corte Suprema, 30 enero 2007, Legal Publishing, CL/JUR/5722/2007. En el mismo sentido, Corte Suprema, 27 de julio de 2017, Legal Publishing, CL/JUR/4928/2017).

En **folio 11**, con fecha 29 de octubre de 2021, se tuvo por evacuada la r  plica, dando traslado para a d  plica.

En **folio 12**, con fecha 4 de noviembre de 2021, la parte demandada evacu   el tr  mite de la d  plica en los siguientes t  rminos. Se  ala que, luego del escrito de la r  plica, deja por zanjado los siguientes hechos no controvertidos: Que, con fecha 19 de julio del a  o 2017, Salfa sur puso t  rmino a la relaci  n laboral de los demandantes por las causales establecidas en el art  culo 160 N   1 y N   7 del C  digo del Trabajo, esto es la falta de probidad del trabajador en el desempe  o de sus funciones y el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, respectivamente; Que, el proceso de desvinculaci  n se materializ   en un documento denominado “Declaraci  n de Transacci  n, Renuncia y/o Desistimiento de Acciones, Recibo y Finiquito Laboral”, el cual desarrolla los hechos que motivaron el despido de los trabajadores, los que fueron expresamente reconocidos por los demandantes; Que, con fecha 28 de julio de 2017, Salfa interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garant  a de Castro, en forma directa en contra de los demandantes, en calidad de coautores del delito de apropiaci  n indebida, causa RIT N   1500-2017; Que, nuestro legislador ha dispuesto expresamente que s  lo procede la indemnizaci  n por lucro cesante y da  o emergente respecto de las imputaciones injuriosas, cuando se acredite la falsedad de la imputaci  n, no proceden las indemnizaciones por da  o moral respecto de imputaciones injuriosas art  culo 2331 C  digo Civil y; Que, ambos demandantes reconocieron expresamente haber actuado con falta de probidad.

Luego, manifiesta que, se hace cargo del   nico punto controvertido en el escrito de r  plica, esto la prescripci  n de la acci  n. Agregando que, los demandantes pretenden sostener que su acci  n indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual, no se funda en el hecho que Salfa Sur, con



Foja: 1

fecha 28 de julio del año 2017, interpuso querrela criminal ante el Juzgado de Letras de Garantía de Castro, si no que en sus resultados. Indicando que claramente, existe un error de interpretación al respecto, toda vez que el artículo el artículo 2332 del Código Civil, dispone: “Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto.”, no desde su resultado.

Manifiesta, que sin perjuicios que existe norma expresa desde cuándo se debe computar la prescripción, en la especie es evidente que es desde la interposición de la querrela, porque es en este momento cuando su parte pone en conocimiento del Ministerio Público, los delitos por los cuales los demandantes fueron llevados a juicio.

Luego, sostiene que respecto de alegación que habría operado la institución de la interrupción de la prescripción, porque los demandantes habrían presentado su demanda ante un tribunal incompetente, acción que fue válidamente notificada a su parte. Señala, que efectivamente su representada con fecha 30 de julio del 2021, fue notificada de la demanda de autos seguida ante el juzgado de letras de Castro, causa rol C-825-2021, la cual fue terminada con fecha 6 de septiembre del 2021, por incompetencia del tribunal.

Agrega, que sin perjuicio que su parte estima que en la especie no ha operado la interrupción de la prescripción, igualmente la acción se encuentra prescrita considerada desde la interposición de la querrela, esto es 28 de julio del 2017.

Expresa, que se debe considerar que en el caso de autos no se puede dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 21.379, ya que los demandantes optaron por notificar la demanda después de los 30 días de que fuese proveída, lo anterior respecto a la causa llevada ante el juzgado de letras de castro.

Así, señala que, en efecto, el artículo 8 de la referida ley para la interrupción de la prescripción impone los siguientes requisitos: Que las acciones se interpongan dentro del estado de excepción constitucional; Que se notifiquen válidamente dentro de los 50 días hábiles siguientes al cese del estado de excepción constitucional o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída.

Señala, que para poder acogerse a esta norma de excepción se debían cumplir con estos requisitos, requisitos que lo demandantes no cumplieron, porque ingresaron su demanda día el 8 de junio del 2021 y la notificaron el 30 de julio del mismo año (después de los 30 días hábiles), por lo que acción tramitada ante el tribunal de Castro ya se encontraba prescrita. La misma norma del artículo 8 de la Ley 21379, dispone: “se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones



Foja: 1

por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisibile y que sea válidamente notificada”, claramente bajo el alero de esta norma de excepción debemos necesariamente entender que una acción interpuesta ante un tribunal incompetente no cumple con el requisito de admisibilidad necesario para su aplicación, porque de lo contrario en la especie los demandantes estarían aprovechando una doble institución de interrupción de la prescripción.

Respecto de las demás alegaciones efectuadas en el escrito de contestación de demanda, las reproduce, para estos efectos.

En **folio 23**, con fecha 20 de diciembre de 2021, se celebró la audiencia de conciliación, con la solo asistencia de la parte demandante y, en rebeldía de la demandada, razón por la cual la diligencia no prosperó.

En **folio 29**, con fecha 30 de diciembre de 2021, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos a probar.

En **folio 43**, con fecha 1 de julio de 2022, se incorporó nuevo punto de prueba.

En **folio 82**, en resolución de fecha 28 de octubre de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. RESOLVIENDO EXCEPCIÓN DE TRANSACCIÓN OPUESTA POR EL DEMANDADO A FOLIO 25.

PRIMERO: Que, el demandado opuso la excepción de transacción, sustentándose para ello en el contrato que los demandantes suscribieron con fecha 19 de julio de 2017 con Salfa Sur Ltda, denominado “Declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento acciones, recibo y finiquito laboral.”. Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil y artículo 2446 del Código Civil.

Señalando, que en virtud del contrato celebrado por las partes, según se estipuló en la cláusula cuarta, elevaron a calidad de transacción, ambos demandantes, renunciaron expresamente a ejercer acciones civiles futuras de cualquier índole derivados de la relación de trabajo que los unió, de la terminación de los servicios o de derechos de cualquier naturaleza, que dicen relación con los hechos que se señalan en la cláusula primera de los referidos contratos de transacción celebrados por cada uno de los demandantes.

SEGUNDO: Que, el abogado de los demandantes, evacuando el traslado de la excepción de transacción opuesta, solicita su rechazo, sosteniendo que, si un finiquito no contiene mención expresa a una acción de indemnización de



Foja: 1

perjuicios por un determinado hecho y/o evento de índole laboral, sólo puede referirse a las prestaciones laborales directamente derivadas de la prestación de los servicios o por su conclusión. Indicando que los perjuicios cuya indemnización pretenden sus representados, resultan posteriores a la relación laboral, toda vez que dicho instrumento fue rubricado con fecha 19 de julio de 2017 y la querella criminal en contra de sus representados fue interpuesta con fecha 28 de julio de 2017.

TERCERO: Que, los finiquito o contratos denominado “Declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento acciones, recibo y finiquito laboral.”, suscritos por los demandantes con Salfa Sur Ltda., y que sustenta la excepción planteada, refiere en su cláusula cuarta que “Las partes convienen en otorgar al presente instrumento la calidad o naturaleza de una transacción al tenor de lo dispuesto en el artículo 2446 del Código Civil, con el objeto expreso y determinado de evitar un eventual litigio o controversia entre las partes derivado del término del contrato de trabajo que lo unió con la empresa.”

CUARTO: Que, de lo reseñado en la motivación anterior aparece claro y evidente que la excepción así planteada tiene relación en un ámbito ajeno a esta causa de naturaleza extracontractual y que no deriva del término del contrato de trabajo como se dispuesto en la cláusula cuarta de ambos documentos suscritos por los demandantes con fecha 19 de julio de 2017, por lo que no cabe sino desestimarla.

II. EN CUANTO AL FONDO:

QUINTO: Que, como se señaló, en la presente causa comparece don **Rodrigo Alberto Vargas Molina**, abogado, en representación convencional, de don **ERIK BASTIAN SANCHEZ SALDIVIA** y de don **DANIEL RODRIGO VERGARA BARRIA**, quienes deducen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, en contra de **AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA.**, solicitando que en definitiva se declare que el demandado deberá pagar la suma de \$100.000.000, a razón de \$50.000.000, por cada actor, o la suma que el Tribunal fije, por concepto de daño moral, más los intereses y costas, según los argumentos y fundamentos reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEXTO: Que, conferido traslado y debidamente emplazada, el demandando contesto la demanda, solicitando su total rechazo, con expresa condenación en costas, según los fundamentos latamente expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia.



Foja: 1

SÉPTIMO: Que, conforme al mérito de autos, se fijó como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1°Efectividad de los hechos señalados en la demanda; 2° Existencia de los perjuicios alegados por la demandante en su libelo, naturaleza, monto de los mismos o elementos para determinar su cuantía; 3° Relación de causalidad entre los supuestos daños y la conducta del demandado; 4° Culpa o dolo en el agente; 5° Existencia del documento denominado “Declaración de Transacción, Renuncia y/o Desistimiento de Acciones, Recibo y Finiquito Laboral. Fecha y estipulaciones del mismo.

Posteriormente, mediante resolución de fecha 1 de julio de 2022, se modifica la resolución que recibe la causa a prueba, agregando el siguiente punto de prueba; “6°Ectividad que la acción de autos se encuentra prescrita. Hechos en que se funda”.

OCTAVO: Que, a fin de acreditar su pretensión, la demandante rindió las siguientes pruebas:

Documental

1. Copia de Declaración, Transacción, Renuncia y/o Desistimiento de Acción, Recibo y Finiquito laboral de fecha 19 de julio de 2017, suscrito entre Automotriz Salfa Sur Ltda. representada por don Joaquín Leoncio Toro Saelzer, y don Daniel Rodrigo Vergara Barría.
2. Copia de Declaración, Transacción, Renuncia y/o Desistimiento de Acción, Recibo y Finiquito laboral de fecha 19 de julio de 2017, suscrito entre Automotriz Salfa Sur Ltda. representada por don Joaquín Leoncio Toro Saelzer, y don Erick Bastián Sánchez Saldivia.
3. Copia del expediente electrónico de la causa Rol O-1500-2017 del Juzgado de Garantía de Castro.
4. Copia de notificación de término de contrato de trabajo de fecha 17 de julio de 2017 emitida por Automotriz Salfa Sur Ltda. a don Daniel Rodrigo Vergara Barría.
5. Copia sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Castro, en causa RUC 1710032928-K, RIT N° 41-2019, de fecha 24 de agosto de 2019.
6. Copia de sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones, en causa Rol Corte N° 553-2019 RPP, de fecha 9 de diciembre de 2019.
7. Copia de contrato de trabajo entre Automotriz Salfa Ltda. y don Erick Bastian Sánchez Saldivia, de fecha 24 de noviembre de 2014.



Foja: 1

8. Copia de modificación de contrato de trabajo, suscrito entre Automotriz Salta Sur Ltda. y don Erick Bastian Sánchez Saldivia, de fecha 01 de enero de 2015.
9. Copia recorte de prensa del Diario la Estrella de Chiloé, de fecha 16 de agosto de 2019.
10. Copia recorte de prensa del Diario la Estrella de Chiloé, de fecha 20 de agosto de 2019.
11. Copia de la cartola Información de Crédito otorgada por la Caja de Compensación Los Andes a don Daniel Vergara Barría.
12. Copia del Certificado de Deuda Equifax de don Daniel Vergara Barría.
13. Certificado de matrimonio de don Daniel Vergara Barría.
14. Informe pericial psicológico de Daniel Vergara Barría.
15. Informe pericial psicológico de Erick Bastian Sánchez Saldivia.

Testimonial

Que, la parte demandante rindió prueba testimonial consistente en la declaración de las siguientes personas, quienes fueron previa y legalmente juramentadas, sin tachas.

Comparece, doña **Marcela Leticia Melian Mansilla**, cédula nacional de identidad N° 14.096.761-0, garzona, quien al tenor del punto número 2° expone: Que ella sabe que los estaban acusando, que le sorprendió e incluso le causó risa, pensando que le estaban haciendo una broma, porque era mucha la plata que se le acusaba que había sustraído. Luego, señala que dio cuenta cuando llegó la demanda, que era algo grave y a él lo empezó a notar que, no sabe si llamarlo depresión porque no es psicóloga ni nada, pero su estado de ánimo cambió de un día para otro, así muy bruscamente. Manifiesta que, después, con el tiempo se le cerraron las puertas en el tema laboral, no lo querían contratar, ella escuchaba cuando él llamaba y la cara de decepción era evidente, se quedó sin recursos y sin ingresos, las deudas aparecieron, de hecho, refiere que ella le tuvo que prestar dinero en el momento, que le fue pagando de a poco y bueno, en esos casos, las amistades desaparecen y en el momento nos tenía solo a ellos, en esa época.

Agrega, que él, se tuvo que ir a vivir a su casa, porque ya no tenía cómo pagar donde él vivía, así que ellos lo recibieron. Manifestando la testigo que fue testigo de su día a día, de que andaba cabizbajo, el tema de no conseguir trabajo. Señala que un día fueron a la notaría con su hija y ella luego le contó que lo habían tratado de estafador, que le gritaron delante de todos, entonces, eso fue



Foja: 1

fuerte para ambos. Indicando que hasta el día de hoy él no encuentra, por lo que ella sabe, nunca más lo volvieron a contratar.

Repreguntada la testigo, para que especifique quien lo estaba acusando y de qué lo estaban acusando, responde, que con el tema de la demanda de la empresa donde él trabajaba, lo acusaban de haber robado, cree, expresando que él trabajaba en Salfa Sur.

Repreguntada la testigo, para que especifique de qué lo estaban acusando, responde, de haber sustraído dinero, haber robado, en el fondo.

Repreguntada la testigo, para que diga cómo le consta el estado de ánimo de don Erick, al momento de los hechos de la acusación que antes señala, responde, que él como se fue a vivir a su casa, por ejemplo, no quería comer, se encerraba en la pieza, lo escuchó llorar un par de veces, ya no era el mismo, agregando que él era, antes de que pase esto, él era súper bueno para echar tallas, sociable y después ya eso desapareció.

Repreguntada la testigo para que especifique cuánto tiempo se fue a vivir don Erick a su casa, responde, que exactamente fueron un par de meses, no sabe, 9 meses, sería un año. Así exactamente no lo recuerda.

Repreguntada la testigo para que diga si sabe si en la actualidad don Erick se encuentra trabajando, responde que no lo sabe.

Repreguntada la testigo, para que diga si don Erick recibió algún tipo de asistencia producto de la depresión que ella señala, responde que tiene entendido que vio a un psicólogo.

Para que diga la testigo en qué fechas habría vivido don Erick en su domicilio, si lo recuerda, responde, que eso fue antes de la pandemia, fue en 2019, si no se equivoca.

Para que diga la testigo si sabe si por esta acusación que usted señala, don Erick fue despedido de su trabajo en Salfa, responde, sí.

Para que diga la testigo si sabe si don Erick demandó laboralmente a Salfa, por los hechos que le imputaron en el despido, responde, que ella no lo sabe.

Comparece, doña **Carla del Pilar Piña Melian**, cédula nacional de identidad N° 19.677.911-6, dueña de casa, domiciliada en Jorge Alessandri 432, comuna de Castro, quien al tenor del punto número 2° expone: que Erick estuvo muy mal por lo que había pasado, su familia le dio la espalda cuando lo vieron en el diario, su mamá no lo quiso saludar y él se fue a vivir con ellos, con su mamá, porque no tenía dónde vivir, no tenía, no podía conseguir trabajo por lo que había pasado. Agrega que estuvo muy triste en la casa, no quería salir, no quería comer, no se quería levantar de la cama, no sabía cómo poder generar ingresos para



Foja: 1

poder salir adelante. Expresa que a él lo acusaron de ser un estafador, el gerente del Salfa Sur, le gritó delante de toda la gente en la notaría y a él, eso le afectó mucho. Señala que sus amigos lo escucharon también, que estaban ahí. Indica, que Erick conoce a muchas personas y hasta ellos lo apuntaban con el dedo por lo que lo habían acusado, hasta ellos le dieron la espalda.

Repreguntada la testigo para que especifique a qué se refiere que él estuvo muy mal con lo que había pasado. Si sabe qué es lo que había pasado, a qué se refiere, responde, que lo que pasó fue que lo acusaron de haber robado neumáticos, baterías, creo, que de haberlo sacado desde la sucursal. No recuerda muy bien, pero fueron muchos millones, fueron varios millones.

Repreguntada la testigo para que diga, ¿de la sucursal de quién?, responde de Salfa Sur.

Repreguntada la testigo para que especifique a qué se refiere cuando señala “cuando lo vieron en el diario, su mamá no lo quiso ayudar”, responde que el salió en el diario, la noticia, obviamente salía de espalda, pero ella sabía que era su hijo y ella no lo quiso ayudar, no lo aceptó en su casa, económicamente tampoco lo quiso ayudar, porque ella sentía vergüenza de su hijo.

Repreguntada la testigo para que especifique: ¿qué noticia es la que sale en el diario a la que se refiere la testigo?, responde que no recuerda exactamente lo que decía la noticia, pero era sobre la demanda que tenía de Salfa Sur.

Repreguntada la testigo para que especifique el estado anímico de don Erick, después de esta acusación a la que ella ha hecho referencia, responde que él estuvo triste en la casa, no quería hacer nada, no tenía ánimos para hacer nada.

Repreguntada la testigo para que señale por qué don Erick se va a vivir a su casa con su madre, con usted y con su madre, responde que fue porque él quedó sin trabajo, tenía deudas que pagar, no tenía con qué pagar un arriendo, con qué pagar sus cuentas, tuvo que endeudarse para poder hacerlo, no le daban trabajo por lo que había pasado, no sé si lo habían, o sea, obviamente se enteraron por el diario y nadie le quería dar trabajo.

Repreguntada la testigo para que diga cuánto tiempo vivió don Erick con usted y con su madre, responde que vivió como casi un año.

Repreguntada la testigo para que diga si se acuerda en qué fecha se fue a vivir a su casa, responde, en el 2019.

Repreguntada la testigo para que diga si sabe, por los hechos que ha señalado, si don Erick fue desvinculado de Salfa Sur, responde, sí.



Foja: 1

Para que diga la testigo, por los hechos que acaba de señalar, si sabe si don Daniel Rodrigo Vergara fue desvinculado también de Salfa Sur, responde que fueron los dos desvinculados y bajo presión, por lo menos a él.

Para que diga la testigo si sabe si don Erick o don Daniel demandaron a su empleador Salfa Sur, por haberlos despedidos, responde que él quería hacerlo, muchas veces se lo dijo, que quería demandarlo. Pero pasaba el tiempo y no lo hacía.

Preguntada para que diga respecto a don Daniel, usted ¿sabe si demandó o no demandó a Salfa Sur?, responde, no.

Preguntada para que responda ¿No demandó o no lo sabe, doña Carla?, responde que él, ella solamente sabe del lado de Erick.

Comparece, don **Samuel Pedro Huichapani Huichapani**, cédula nacional de identidad N° 14.309.857-5, supervisor en empresa de transporte, domiciliado en Los aramo 651, comuna de Castro, quien al tenor del punto número 2° expone: Que, bueno, los perjuicios del punto de vista moral se imagina, señala que toda persona que queda sin trabajo no tiene un ingreso, se le repercute también en lo personal, del punto de vista familiar. Expresa que hasta lo que él tiene entendido, Daniel hasta se separó de su pareja, en el caso de Erick parece que igual tiene entendido, que está asociado a lo mismo, entonces igual para él es un daño moral.

Repreguntado al testigo para que especifique a qué se refiere con perjuicios desde el punto de vista moral, responde, que desde el punto de vista moral, quedarte sin trabajo, no tienes un ingreso fijo permanente, de la noche a la mañana y después ser demandado por una empresa; colocándose en los pantalones de una persona del punto de vista normal, le afecta y le repercute en el día a día, en lo familiar, en el caso de los que tengan pareja o están casados o también en los familiares que también tienen un vínculo con sus papás, con sus mamás, en el caso de otros.

Repreguntando al testigo para que diga si sabe por qué se habrían producido estos perjuicios en los demandantes. ¿Cuál fue la causa de estos perjuicios que él señala que se les produjeron a los demandantes? Responde que él tiene entendido que fueron desvinculados, porque se les asoció a temas ilícitos dentro de la empresa y hasta lo que él sabe, lo cual desconoce si fue o no aprobado a posterior, pero ellos quedaron sin trabajo a los dos, uno de ellos parece que ya no vive tampoco acá en la isla; y eso es lo que él considera que igual es un daño moral, desde mi perspectiva de ver las cosas.

Repreguntando al testigo para que diga si sabe en qué situación anímica o estado emocional se encuentran o se encontraron los demandantes después de esta acusación que le hizo la empresa, según sus dichos. Responde, que el



Foja: 1

principalmente lo he sabido a través de terceros, porque el como explicaba al inicio de la audiencia, decía que el mucho nexo no ha tenido con ellos, porque uno, desde que se desvincularon el tuvo siempre una relación principalmente laboral con ellos, con ambos y posterior a eso ya le perdí la hebra. Expresa que como uno trabaja en el mismo ambiente relacionado con otras personas, el comentario que había era eso, que había un quiebre emocional de parte de ellos, que tenían problemas financieros asociados a la salida de la empresa y que, de un tiempo a esta parte, por lo que muchos dicen, hasta les ha costado repuntar.

Repreguntando al testigo, para que diga quiénes son esos terceros que le han entregado la información respecto de los demandantes que él señala, responde que terceros, son principalmente personas que trabajaban con él en esa época en Salfa Sur, la gente del área administrativa, compañeros de trabajo asociados más a ellos que, por cierto, de un tiempo a esta parte, el ya no tiene mucho link, porque ya no trabaja ahí en la empresa, hace tres años. Manifestando que el siempre tuvo un vínculo laboral, fuera de la empresa ya difícilmente tenía un tipo de vínculo con ellos. De hecho, está trabajando en otra empresa ahora y los nexos, en este caso, la relación son con otras personas.

NOVENO: Que, por su parte, la parte demandada a fin de acreditar sus pretensiones rindió la siguiente prueba:

1. EBook, causa civil C-825-2021, seguida ante el Juzgado de Letras de Castro, caratulada "Vergara con Salfa Sur".
2. Notificación receptor causa rol C-825-2021 del Juzgado de Letras de Castro.
3. Querella criminal causa RIT 1500-2017 del Juzgado de Garantía de Castro.
4. Formalización causa RIT 1500-2017 del Juzgado de Garantía de Castro.
5. Acusación fiscal causa RIT 1500-2017 del Juzgado de Garantía de Castro.
6. Acusación Particular causa RIT 1500-2017 del Juzgado de Garantía de Castro.
7. Audiencia de preparación de juicio oral causa RIT 1500-2017 del Juzgado de Garantía de Castro.
8. Sentencia dictada por el Tribunal Oral de Castro RIT 41-2019.
9. Recurso de nulidad causa Rit 41-2019 interpuesto por el querellante.
10. Sentencia que rechaza sin costas el recurso de nulidad dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt Rol 553-2019.
11. Declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento de acciones, recibo y finiquito laboral suscrito por Daniel Rodrigo Vergara Barría de fecha 19 de julio del 2017.



Foja: 1

12. Declaración, transacción, renuncia y/o desistimiento de acciones, recibo y finiquito laboral suscrito por Erik Bastián Sánchez Saldivia de fecha 19 de julio del 2017.

DÉCIMO: Que, previo a comenzar el análisis sobre el fondo de la acción deducida, es necesario proceder a resolver el punto de prueba signado con el número 6, que refiere sobre la efectividad que la acción de autos, sobre indemnización de perjuicios extracontractual se encuentra prescrita.

UNDÉCIMO: Que, la parte demandada ha fundado esta excepción en que la acción por responsabilidad extracontractual se encuentra prescrita, toda vez que a la época de notificación de la presente demanda, que fue realizada con fecha 28 de septiembre de 2021, habría transcurrido los cuatro años para el ejercicio de la acción contados desde la perpetración del acto, según lo dispone el artículo 2332 del Código Civil. Señalando que la perpetración de acto que da origen a la supuesta responsabilidad civil extracontractual que se imputa a Salfa Sur Ltda., se debe contar desde el hecho generador del daño, esto es, con la interposición de la querella criminal ante el Juzgado de Letras de Garantía de Castro en contra de los demandantes, en calidad de coautores del delito de apropiación indebida que dio origen a la causa RIT N°1500-2017, que fue con fecha 28 de julio de 2017.

DUODÉCIMO: Que, la parte demandante en su escrito de réplica ha sostenido que no se debe considerar el criterio de la parte demandada, esto es, que el computo del plazo de los 4 años comienza desde la fecha en que Salfa Sur Ltda., interpuso la querella criminal en contra de sus mandantes, si no desde su término, una vez concluido el debate jurídico, a través de un fallo absolutorio confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 19 de diciembre de 2019. A su turno, argumenta que si el daño que se ha infringido a sus representados fluye desde la radicación de la acción penal, está tampoco ha prescrito, toda vez que ocurrió en la especie la interrupción civil de la prescripción, con la interposición de la misma demanda de autos ante el Juzgado de Letras de Castro, con fecha 8 de junio de 2021, Rol C-825-2021, por considerar, en primera instancia, que dicho tribunal era el competente para conocer el asunto.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme el artículo 2492 del Código Civil, la prescripción es un modo de extinguir la acciones, por no haberse ejercido dichas acciones durante cierto lapso de tiempo. Por su parte, el artículo 2332 del citado cuerpo legal establece que, tratándose de responsabilidad extracontractual, las acciones por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.



Foja: 1

DÉCIMO CUARTO: Que, el artículo 2518 del Código Civil, en relación a la interrupción de la prescripción, establece en su inciso primero: “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente”. El inciso tercero señala: “Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enumerados en el artículo 2503”.

Que, por su parte, el artículo 2503 del Código Civil establece los casos en que no opera la interrupción de la prescripción, aun cuando se haya presentado demanda y dispone en el número 1: “Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal”. El inciso final de dicho artículo establece claramente que “En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda”.

DÉCIMO QUINTO: Que, para resolver la controversia planteada, corresponde determinar, cual es el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción por responsabilidad extracontractual que nos ocupa, esto es, desde la perpetración del acto o desde la concreción del daño sufrido, y al respecto cabe consignar que el artículo 2332 del Código Civil constituye una norma especial de prescripción de corto tiempo, que innova respecto a la regla general del artículo 2514 del mismo texto legal, que dispone que el tiempo se cuenta desde que la obligación se ha hecho exigible.

Por otra parte, del tenor literal del artículo 2332 del Código Civil se desprende que el plazo referido se cuenta “desde la perpetración del acto”, de manera que los cuatro años deben contarse desde la comisión del acto antijurídico doloso o culpable, el que a juicio de esta sentenciadora acaece al momento de la interposición de la querella, esto es, el día 28 de julio de 2017, y no desde la sentencia absolutoria confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 19 de diciembre de 2019, puesto que esta última fecha no constituye en ningún caso un hecho dañoso.

DÉCIMO SEXTO: Que, atendido el mérito de lo señalado anteriormente, conforme a copia de expediente en causa RIT 1500-2017 del Juzgado de Garantía de Castro, acompañada a folio 28, consta que está fue interpuesta con fecha 28 de julio de 2017, contra los demandantes de autos, constituyendo esta data la fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a su turno, y respecto a la interrupción de la prescripción señalada por el demandante en su escrito de réplica, se puede señalar que, aun cuando algunas sentencias han concedido efectos interruptivos



Foja: 1

al acto de interposición de la demanda, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria de nuestro país no lo ha reconocido de ese modo.

Así, la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 27 de abril de 2020, rol 4543-2019, recaída en una acción indemnizatoria por accidente laboral, ha ratificado esta posición tras un pormenorizado análisis legal y doctrinario respecto de las reglas aplicables en especial los artículos 2518 y 2503 del Código Civil. Entre otros fundamentos señaló: *“Séptimo: Que, en este caso, esta Corte coincide con la posición dominante de la doctrina nacional, que ha afirmado la necesidad de la notificación legal de la demanda para que opere la interrupción del plazo de prescripción. Así lo han manifestado don Ramón Domínguez Benavente (Interrupción de la prescripción por interposición de demanda judicial”, en Boletín de la facultad de derecho y ciencias sociales, Córdoba 1969, pp. 77-86); don Alfredo Barros Errázuriz (Curso de Derecho Civil, Santiago, 1942, p.311) y don Ramón Meza Barros (De la prescripción extintiva civil, Santiago, 1936, p. 42). El argumento esencial para sustentar esta posición es lo previsto en el artículo 2503 N°1 del Código Civil, de manera que la ausencia de notificación legal de la demanda impide la interrupción, lo que conlleva erigir aquella en condición de ésta. En consecuencia, no sólo resulta necesario notificar en forma válida sino que debe ocurrir antes que haya expirado el plazo de prescripción. Por consiguiente, el efecto interruptivo se produce con la notificación sin que la sola presentación de la demanda pueda asignársele esa consecuencia.*

Octavo: Que la interrupción civil del curso del término legal necesario para declarar la prescripción extintiva, según lo señala el artículo 2518 del Código Civil, se produce por la demanda judicial, salvo que concurren los casos enumerados en el artículo 2503 del mismo cuerpo legal, que son los siguientes: 1° si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 2° si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia; y 3° si el demandado obtuvo sentencia de absolución. Pues a juicio de esta Corte, la interpretación correcta de dichas normas es aquella que postula que es la notificación judicial de la demanda efectuada en forma legal la que provoca el efecto de impedir que se complete el plazo de que se trata, porque pretender que es la sola presentación del libelo, pero supeditada a su notificación judicial posterior, significaría, en primer lugar, que quedaría al arbitrio del demandante la determinación de la época en que la interrupción se consolidaría.”

Por lo anterior, y atendido a lo que se desprende del atestado de rectorial, acompañado a folio 51, que idéntica demanda de autos sobre indemnización de perjuicios se interpuso ante el Juzgado de Letras de Castro Rol



Foja: 1

C-825-2021, la cual fue notificada con fecha 30 de julio de 2021 al representante legal de Automotriz Salfa Sur Limitada, por lo que no cabe más que concluir que el plazo de prescripción fue interrumpido en dicha fecha a través de la notificación válidamente realizada.

Así, teniendo presente que la querella interpuesta causa RIT 1500-2017 del Juzgado de Garantía de Castro, fue interpuesta con fecha 28 de julio de 2017, y que la notificación de la demanda interpuesta ante el Juzgado de Letras de Castro Rol C-825-2021, hecho que interrumpe la prescripción según lo señalado anteriormente, fue notificada con fecha 30 de julio de 2021, esto es, habiendo transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, motivo por el cual se hará lugar a la excepción alegada, declarándose en definitiva la prescripción de la acción que se ha impetrado en estos autos; y consecuentemente, se rechazará la demanda formulada a folio 1.

DÉCIMO OCTAVO: Que, atendido a lo razonado y concluido en los motivos que anteceden, se omitirá pronunciamiento respecto de la acción de fondo de lo discutido, por ser inoficioso entrar a conocer de las demás alegaciones efectuadas en la demanda.

DÉCIMO NOVENO: Que, el resto de la prueba rendida en esta causa y no ponderada en los considerandos anteriores, en nada altera lo ya resuelto.

Por estas consideraciones y, vistos además, lo dispuesto en el artículo 1698, 2492, 2314, 2332 del Código Civil; 144, 160, 160, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; **SE RESUELVE:**

- I. Que, **se rechaza** la excepción de transacción formulada por la parte demandada en su escrito de folio 25.
- II. Que, **se acoge** la excepción de prescripción de la acción formulada por la demandada Automotriz Salfa Sur Ltda., en su escrito de folio 6. En consecuencia, **se rechaza** en todas sus partes la demanda por responsabilidad extracontractual formulada a folio 1 y siguientes por don **Erik Bastian Sánchez Saldivia** y don **Daniel Rodrigo Vergara Barría**, en contra de **Automotriz Salfa Sur Ltda.**
- III. Que, no se condena en costas a la parte demandante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NDLBXEQZXXC

C-2886-2021

Foja: 1

Rol N° 2886-2021.

Dictada por doña **ERIKA STILLNER LEDEZMA**, Jueza Titular del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt.

En Puerto Montt, a 08 de marzo de 2023, se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NDLBXEQZXXC